132

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución Alcance Particular

Número: RESAP-2023-72-APN-UIF#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Mayo de 2023

Referencia: EXPTE. UIF N.° 1177/2017 - ESCRIBANO GÓMEZ BERTI EUGENIO S/INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN UIF N.° 50/2011 Y MODIFICATORIAS

VISTO el Expediente N.° 1177/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N.° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, y las Resoluciones UIF Nros. 21 del 18 de enero de 2011, 50 del 31 de marzo de 2011 y sus modificatorias, 111 del 14 de junio de 2012 152 del 23 de noviembre de 2016, y sus respectivas modificatorias, y 190 del 28 de junio de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el presente sumario se inició mediante Resolución UIF Resolución UIF N.° 190/2018 del 28 de junio de 2018 (v. fs. 29/31 vta.).

Que en dicho acto administrativo se formuló un cargo por presunto incumplimiento al deber de registrarse como sujeto obligado, conforme lo dispuesto en la Resolución UIF N° 50/2011.

Que el mencionado procedimiento tuvo por objeto establecer la configuración de la infracción prevista en el artículo 24 del Capítulo IV de la ley citada y, en su caso sugerir la sanción que pudiera corresponder.

Que, asumida la Instrucción el 16 de julio de 2018 (v. fs. 34), se realizó la consulta al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) a fin de verificar los datos de registración del sujeto obligado, obteniendo un resultado negativo (v. fs. 35).

Que, en idéntica fecha, se procedió a: (i) citar en calidad de sumariado al escribano Eugenio GÓMEZ BERTI (CUIT N.° 20-28238800-7), para que en el plazo de doce (12) días hábiles administrativos presentara descargo y ofreciera prueba a fin de ejercer su derecho de defensa, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolución UIF N.° 111/2012; (ii) instarlo a constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede central de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) donde tramitan las actuaciones, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha del dictado de las providencias y/o resoluciones en el marco de las actuaciones de la referencia; y (iii) citarlo a la audiencia fijada para el 17 de agosto de 2018 (v. fs. 36/36 vta.).

Que, sin perjuicio de que el sumariado fue notificado por oficio (v. fs. 37/37 vta.) el 30 de julio de 2018 (v. fs. 38 y 45) al domicilio informado por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, el 12 de noviembre de 2018 se efectuó una consulta al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) a fin de verificar el domicilio que registraba el sumariado con el objeto de librar un nuevo oficio al mismo dejando sin efecto tanto la audiencia fijada para el 17 de agosto de 2018 como el acta de incomparecencia a dicha audiencia que luce agregada a fs. 41, fijando una nueva para el 12 de diciembre de 2018, y librando la nueva notificación pertinente en consecuencia, quedando notificado el sumariado el 17 de diciembre de 2018 (v. fs. 46/67).

Que el 3 de agosto de 2018 se procedió a ordenar que se librara oficio al Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos a fin de que informara la fecha de inicio de la actividad notarial, si tenía alguna inhabilitación, licencia o sanción disciplinaria y por qué períodos, en qué carácter realizaba la función notarial (titular/adscripto), y en caso de ser adscripto, los datos del titular del Registro (v. fs. 39).

Que, ante el pedido de información remitido por oficio al Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos (v. fs. 40 y 42), el 12 de septiembre de 2018 éste informó que el escribano sumariado: (i) inició su profesión el 16 de septiembre de 2016 como Adscripto al Registro Notarial N.° 4 con asiento en la ciudad de Rosario del Tala, de titularidad del Escribano Juan Carlos POGGIO (LE. N.° 5.869.933); y (ii) en su legajo personal de la Institución no registraba sanción disciplinaria alguna (v. fs. 43).

Que, el 31 de enero de 2019, en atención al dictado de la Resolución UIF N.° 96 del 27 de agosto de 2018, qu aprobó el sistema de notificaciones y tramitación electrónica de expedientes aplicable al procedimiento sumarial, y advirtiendo que en el punto II del auto de citación se intimó al sumariado a constituir domicilio especial en C.A.B.A., cuando en virtud de lo dispuesto en dicha norma las notificaciones se deben efectuar al domicilio electrónico, se dejó sin efecto la intimación cursada en el punto II del auto de citación de fecha 16 de julio de 2018 obrante a fs. 36, e intimó *"... al sumariado por el plazo de DOCE (12) días hábiles administrativos, a fin de obtener el Código de Usuario del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica, previsto en la Resolución UIF N° 96/2018, para recibir a través de la plataforma virtual del mencionado Sistema, todas las notificaciones al domicilio electrónico, y poder mediante dicho Sistema tomar vista de las actuaciones y efectuar las presentaciones digitales que estimen pertinentes, siempre y cuando para ello cuente con Firma Digital en los términos de la Ley N° 25.506 y el Decreto N° 2628/2002, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la Sede Central de esta UIF donde tramitan las actuaciones, el primer día de nota hábil —martes o viernes- posterior a la fecha del dictado de las providencias y resoluciones en el marco de las actuaciones de la referencia"* (v. fs. 68/69).

Que, en idéntica oportunidad se dejó sin efecto la audiencia fijada para el 12 de diciembre de 2018, y citó al sumariado a prestar declaración el día 26 de febrero de 2019.

Que, de lo dispuesto el sumariado fue notificado por oficio el 7 de febrero de 2019 (v. fs. 69/77 vta. y 80/85 vta.).

Que, ante la incomparecencia del sumariado a la audiencia mencionada, se dejó constancia de ello en el acta labrada en tal fecha (v. fs. 78).

Que, el 29 de julio de 2019, atento el estado de las presentes actuaciones y siendo que el sumariado no había presentado descargo, pese a que se encontraba debidamente notificado, se le dio por decaído el derecho para hacerlo (v. fs. 86).

Que, en idéntica oportunidad, en atención a que el sumariado no había retirado el código de usuario, se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto por el artículo 6° *in fine* de la Resolución UIF N.° 96/2018.

Que, la Instrucción efectuó nuevas consultas al SRO, e incorporó las respectivas constancias, de las cuales se desprendió que: (i) el escribano Eugenio GÓMEZ BERTI se registró ante esta Unidad el 24 de diciembre de 2018; y (ii) el escribano Juan Carlos POGGIO, titular registral conforme lo informado por el Colegio de Escribanos mencionado, no se encontraba registrado ante esta Unidad (v. fs. 87/89).

Que, atento el estado de las presentes actuaciones, se corrió traslado al sumariado de las medidas para mejor proveer ordenadas y debidamente cumplimentadas para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos presentara su alegato (v. fs. 89).

Que, el 17 de diciembre de 2019, advirtiéndose que el sumariado no había presentado el alegato contemplado en el artículo 29 de la Resolución UIF N.° 111/2012, pese a que se encontraba debidamente notificado, se le dio por decaído el derecho para hacerlo, y, en atención al estado de las presentes actuaciones pasaron las mismas a elaboración de Informe Final (v. fs. 90).

Que, luego de constatar el registro de antecedentes (v. fs. 91/92), y certificarse el cumplimiento formal de las etapas del procedimiento sumarial conforme Resolución UIF N.° 111/2012 el 30 de octubre de 2020 (v. fs. 93/94 vta.), el 18 de noviembre de 2020 la Instrucción elaboró el Informe Final de conformidad a lo previsto por el artículo 30 de la Resolución UIF N.° 111/2012 (v. fs. 95/106), en el cual analizó los hechos y las constancias de autos, a efectos de determinar la existencia del incumplimiento mencionado en la Resolución de inicio del sumario, y en este sentido, consideró el cargo detallado en dicha Resolución y meritó el mismo a la luz de lo actuado en el procedimiento sumarial.

Que, en atención al cargo vinculado con la falta de Registración oportuna en el SRO (incumplimiento a la Resolución UIF N.° 50/2011), es menester recordar la imputación contenida en la Resolución que dispuso la apertura de este sumario, a cuyo texto cabe remitirse, así como a la ya citada normativa aplicable, y los antecedentes obrantes en el presente Expediente.

Que en el acto de apertura del presente sumario se imputó el siguiente cargo respecto del escribano: *"...haber incumplido, prima facie, el deber de registrarse como sujeto obligado conforme lo dispuesto en la Resolución UIF N° 50/2011 y modificatoria"*.

Que la falta de registración fue constatada por la Dirección de Supervisión y consignada en su informe técnico en el que se manifestó que a la fecha de realizarse la consulta en el SRO (4 de diciembre de 2017), el escribano sumariado no se encontraba inscripto ante esta UIF (v. fs. 15/16 vta.).

Que la obligación de registración ante esta UIF rige para todos los sujetos obligados en virtud del artículo 21 de la ley N.° 25.246.

Que el artículo 2° de la Resolución UIF N.° 50/2011 estableció que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 que se encontraban en actividad al momento de su publicación, debían registrarse en la página web de la UIF (www.uif.gov.ar/sro) entre el 1° y el 30 de abril de 2011, siendo que el artículo 3° de la misma norma dispuso que aquellos sujetos obligados que inicien su actividad con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución UIF N.° 50/2011 debían efectuar la registración dentro del 1° al 30 del mes correspondiente al inicio de la misma.

Que de los antecedentes del sumario se desprende que el sumariado se registró el 24 de diciembre de 2018, fecha ésta posterior al inicio de los presentes actuados (v. fs. 87).

Que el sumariado estaba comprendido en la situación prevista en el artículo 3° de la mencionada Resolución, ello por cuanto de acuerdo con lo informado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos el mismo desde el 16 de septiembre de 2016 era adscripto al Registro Notarial N.° 4 de la localidad de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos.

Que cabe tener presente que de las actuaciones que el Escribano a pesar de haber sido debidamente notificado, no presentó descargo ni alegatos en las presentes actuaciones.

Que, en cuanto respecta a la situación de los escribanos adscriptos, cabe recordar el criterio hermenéutico de acuerdo al cual donde la ley no distingue no corresponde al intérprete efectuar tal distinción (CJSN, Fallos 304:226; 330-971; 333:735, entre otros), y siendo que el inciso 12 del artículo 20 de la ley N.° 25.246 incluye entre los sujetos obligados a los Escribanos Públicos sin efectuar distinción alguna entre titulares y adscriptos, no resulta válida la interpretación realizada por el sumariado al omitir su registración.

Que, en virtud de los antecedentes del sumario y considerando la normativa aplicable, la Instrucción tuvo por acreditado que el Escribano, que ejerció la función notarial en carácter de adscripto desde el 16 de septiembre de 2016, incumplió con el deber de registración en forma oportuna ante esta UIF, siendo que hasta el 24 de diciembre de 2018 persistió en su falta de registración como sujeto obligado ante esta UIF.

Que, se destaca que el escribano sumariado ejerció efectivamente la actividad notarial, y que su falta d registración ante esta UIF configuró una infracción a lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución UIF N.° 50/2011, resultando en consecuencia responsable del cargo imputado, a tenor de lo prescripto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N.° 25.246 y modificatorias.

Que quedó acreditado el cargo por las obligaciones establecidas en el artículo 3° de la Resolución UIF N.° 50/2011 y modificatorias, habiendo la Instrucción sugerido la aplicación de una sanción de MULTA DE PESOS SETENTA MIL ($70.000) por incumplir el deber de registración en el SRO.

Que, sin perjuicio de que el sujeto obligado no lo ha planteado, se advirtió que resultaba necesario contemplar las implicancias en el presente sumario de la medida cautelar que estuvo vigente en el marco del expediente caratulado "COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" Expte. N° FPA 22000026/2005.

Que, cabe destacar que, en el marco del mencionado expediente judicial, sin perjuicio de que la Cámara Federal de Paraná hizo lugar al planteo de caducidad de la instancia extraordinaria, y en consecuencia, devino firme la sentencia de Cámara favorable a la UIF el 10 de septiembre de 2018, siendo que para esa fecha el Escribano ahora sumariado ya había procedido realizar su registración en el SRO, cabe aclarar los diferentes hitos acaecidos en el marco del reclamo iniciado por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, así como los períodos en los cuales no regía ninguna limitación para la aplicación de la normativa, y dentro de los cuales por lo tanto puede considerarse incumplida la misma por parte del sumariado.

Que, la demanda originalmente incoada por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos tuvo por objeto que se declarara la inconstitucional de los artículos 14 inciso 10, 20 inciso 12, y 21 incisos b) y c) de la ley N.° 25.246, así como la Resolución N° 10/04 de la Unidad de Información Financiera, en cuanto entendía que esas normas violentarían el principio constitucional de "legalidad" (artículos 18 y 19 C.N.). En el marco de tal expediente, el 26 de abril de 2005 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hizo lugar a la medida cautelar.

Que, posteriormente la actora denunció la existencia de "nueva normativa" y pidió que se adecuara la medida

cautelar, solicitando que se declarare oportunamente la inconstitucionalidad de esa "nueva normativa" (es decir, la Resolución UIF N.° 21/2011), a lo que el Juez Federal de Primera Instancia resolvió: *"1) Hacer lugar a la petición formulada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos y en consecuencia, disponer que se mantenga la medida cautelar dictada por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta jurisdicción contra la Resolución N° 10/2004, en lo que no fue objeto de derogación; disponer como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la Resolución N° 21/2011 hasta tanto recaiga sentencia definitiva.- 2)... - 3) Tener por denunciado hecho nuevo y por planteada la inconstitucionalidad de la Resolución UIF N.° 21/2011, corriéndose traslado por el término de ley, con entrega de copias. ... (...)"*, siendo esta Resolución notificada a la UIF el 16 de marzo de 2011.

Que, seguidamente, la UIF apeló y la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió el 27 de septiembre de 2011, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la UIF y en consecuencia revocar la resolución citada, que había dispuesto la medida cautelar de suspensión de los efectos de la normativa hasta tanto recayera sentencia definitiva. La sentencia de Cámara fue notificada a la UIF el 06 de noviembre de 2011.

Que, luego, el 8 de agosto de 2013, por sentencia de primera instancia se resolvió hacer lugar a la demanda promovida por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos contra el Estado Nacional y, en su consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 14 inciso 10; 20 inciso 12°, 21 incisos b) y c) de la ley N.° 25.246 y de las Resoluciones UIF N° 10/2004 y 21/2011, resultando inaplicables respecto del Colegio de Escribanos de Entre Ríos y los Escribanos públicos que estando matriculados en el mismo ejercieran esa profesión en la Provincia de Entre Ríos, por entender que resultaban ellas violatorias de los artículos 18 y 19 de la Constitucional, del artículo 11 apartado 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 15 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Que, si bien entre noviembre de 2011 y agosto de 2013 no rigió ninguna limitación a la normativa UIF, durante ese lapso el ahora sumariado aún no se encontraba matriculado como Escribano ni ejercía la función notarial.

Que, posteriormente, el 22 de octubre de 2015, la Cámara mencionada resolvió hacer lugar al recurso de apelación incoado por la UIF y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida, y el 10 de septiembre de 2018 la misma Cámara declaró firme la sentencia dictada por ese Tribunal, fecha a partir de la cual el sumariado debió necesariamente haberse registrado, por no regir ya ninguna medida judicial que limitara la aplicación de la normativa de la UIF.

Que la finalidad de las sanciones administrativas es, junto con el reproche concreto por el incumplimiento constatado, la prevención y disuasión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, evitando la reiteración de incumplimientos por parte de los sumariados y la vigencia y efectividad de las normas de PLA/FT para el resto de los actores del sistema.

Que debe tenerse presente que las sanciones impuestas por esta Unidad *"...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturaleza de las medidas represivas propias del derecho penal" (Fallos:330:1855, "Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala II, causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal –Ley 25.246 –Dto. 290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión "pena" contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado de dinero y régimen penal administrativo", La Ley 2003C1272).*

Es por ello que no puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las normas específicas (Fallos: 330:1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo sancionador (Sala II, causa "Emebur", citada)" (CNACAF, Sala I, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 36/10 (Expte. 68/10)" del 24/05/2016 y "Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25" del 20/09/2016).

Que, *"...en cuanto a la naturaleza de las multas aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal. Precísese que los castigos que se imponen como consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...) constituyen infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse la aplicación indiscriminada de lo principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva del derecho penal (conf. -en este sentido- dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/transferencia paquete accionario a Nabisco", el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (...) Desde esta perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa y no penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se encuentra previsto en la resolución U.I.F. N° 111/2012-, pero sí impide una traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal. En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N° 290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y en nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí señalado, el régime bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los ilícitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo de los denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de la esfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a desestimar sin más toda argumentación formulada que tuviera sustento en la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal"* (CNACAF, Sala II, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 23/02/2016).

Que, este criterio ha sido reiterado por jurisprudencia del fuero al sostener que *"...la actividad desplegada por la sancionada se encuentra sometida al poder de policía ejercido por la Unidad de Información Financiera (...) que*

ha sido designado como el encargado del análisis, tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (conf. art. 6, ley 25.246) y, conforme lo dispuesto en el capítulo IV del referido precepto, se encuentra facultada para reglamentar y sancionar –dentro de los límites contemplados en el referido precepto– la inobservancia de las pautas acordadas que hacen, básicamente, al cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los "Sujetos Obligados..." (CNACAF, Sala II, "Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25246 – Dto. 290/07 art 25" (Expte. N.° 2342/2018, sentencia del 28 de agosto de 2018).

Que, corresponde resaltar que es potestad propia y exclusiva de quien aquí suscribe, establecer el *quantum* de la multa a aplicar por el incumplimiento acreditado por la Instrucción durante el procedimiento sumarial.

Que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad, y que existen medios para limitar la discrecionalidad de la que goza la Administración Pública en la determinación del monto de las multas que impone, como son las reglas de graduación, resultando menester ponderar las circunstancias que concurren en el caso a fin de fijar el quantum de la sanción.

Que, es dable señalar, con relación al considerando anterior, que en numerosas oportunidades se ha señalado que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (v. 19/09/2017, Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala V; Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 – DTO. 290/07 ART. 25; 27/05/1997, Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala V; Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina; 19/07/2006, Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala II, Travaglia, José O. y otros c/ BCRA – Resolución N° 109/2012 – Expte. 100.045/94 Sum. Fin. N° 893; entre otros).

Que, sin embargo, cabe indicar que el procedimiento administrativo que se despliegue a fines de efectivizar el régimen sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo necesario para la satisfacción de su cometido.

Que el principio de proporcionalidad encierra una exigencia de ponderación guiada a que se corresponda la gravedad de la sanción con la del comportamiento de los sumariados y que la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación.

Que resulta relevante enunciar cuáles son, en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven de guía para una razonable cuantificación de las sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias.

Que, en este sentido, se ponderó: i) el carácter y naturaleza del incumplimiento imputado en esta instancia sumarial, siendo que la falta de registración ante esta UIF es una infracción que reviste especial importancia, debido a que la misma pone en desigualdad a los sujetos obligados que procedieron a registrarse en tiempo y forma, e impide, en principio, el cumplimiento de otras obligaciones establecidas por la normativa aplicable y dificulta el ejercicio de la atribución de fiscalización por parte de esta UIF; (ii) el lapso de tiempo del incumplimiento de la obligación de registración por parte del sumariado; (iii) que este Sumario es el primero que registra el Escribano; y (iv) que el sumariado procedió a registrarse el 24 de diciembre de 2018, con posterioridad a la apertura de sumario.

Que, a los fines de graduar la sanción, debió ponderarse el periodo durante el cual estuvo vigente la medida cautelar arriba descripta.

Que, sin perjuicio de que la Instrucción aconsejara la aplicación de una sanción de multa, corresponde recordar la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN) que desde antiguo sostiene que el instructor solo aconseja y su opinión no es vinculante para la autoridad a resolver (conf. Dict. 140:133;151:590;152:262;169:444;198:11;218:309;236:596).

Que, por ello corresponde, aplicar la sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), por haber incumplido en lo establecido en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que, en definitiva, no resulta exigible una exacta correspondencia entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (Fallo "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art. 4", sentencia de la CNACAF, Sala V, del 14.07.2015).

Que se ha pronunciado reiteradamente la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN) al indicar que *"...la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación y por ello no es competencia de esta Casa abrir juicio acerca de ello..."* (Dictámenes PTN 133:113, 261:121, 293:144, 295:269, entre otros) y que *"...la determinación precisa del monto de la pena entre los límites mínimo máximo establecidos por la ley constituye una facultad discrecional exclusiva de la autoridad con competencia para resolver..."* (Dictamen PTN 294:114).

Que toda facultad discrecional –como lo es la determinación del monto de la multa a aplicar- requiere la necesidad de una valoración subjetiva por parte de la Administración, al permitirle elegir entre una o más alternativas válidas, igualmente ajustadas desde la perspectiva del Derecho (cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, t. I, p. 444, 8° ed., Civitas, Madrid, 1997).

Que es claro que el legislador ha establecido un margen de acción o elección para el ejercicio de la denominada discrecionalidad administrativa o arbitrio administrativo, así la adopción del monto, por parte de quien aquí suscribe, a partir del asesoramiento realizado por el área técnica o por el Consejo Asesor, en ejercicio de facultades discrecionales, deberá, siguiendo la tesis delineada por Fiorini, engarzarse con la función administrativa y, con los fines administrativos (conf. cita en Derecho Administrativo en transición, Juan G. Corvalán, pág. 76, Bs. As. Astrea, 2016).

Que, con relación a la responsabilidad que le cabe al aquí sumariado, es del caso mencionar que la Resolución UIF N.° 190/2018 del 28 de junio de 2018 (v. fs. 29/31 vta.) ordenó la apertura de estas actuaciones sumariales al sujeto obligado por haber incumplido, *prima facie*, lo dispuesto en la Resolución UIF N.° 50/2011 y modificatoria.

Que, con relación a las funciones encomendadas a los Escribanos públicos como Sujetos Obligados, corresponde tener presente que *"... Dentro de esta relación de sujeción especial se atribuye razonablemente un rol preponderante a los escribanos en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros. Sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo..."* (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN), "Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN

s/ sumarísimo" del 4 de septiembre de 2018).

Que, en dicho precedente el Máximo Tribunal sostuvo, respecto del régimen informativo, que en consonancia con los estándares internacionales, se entiende que el cumplimiento de esas funciones en forma eficaz demanda la colaboración de los Escribanos que además, cumplen una función de especial naturaleza al dar fe pública a los actos y contratos.

Que, respecto a la relevancia de cumplir con el deber de registración, la jurisprudencia ha dicho que *"... la registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF (www.uif.gov.ar) tiene por finalidad la identificación de aquellos y facilitar el contacto permanente y fluido. Asimismo, constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de internet (Considerandos de la resolución 50/11). Sobre dicha base, no resulta admisible el cuestionamiento de la sanción con fundamento en la falta de entidad de la infracción... (art. 24 de la ley 25.246)"* (Clariá, Horacio Enrique c/UIF s/CÓDIGO PENAL-LEY 25246 –DTO 290/07 ART. 25).

Que, dado el carácter técnico administrativo de las irregularidades en cuestión, su punibilidad surge de la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello se derive, resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes.

Que, con relación a la afectación al bien jurídico tutelado, la responsabilidad en la materia *sub examine* no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular, pues el interés público se ve afectado aún por el perjuicio potencial que aquél pudiere ocasionar.

Que, en este sentido, conforme se ha dicho en los autos caratulados "Cerviño, Guillermo A. y Otros c/ Banco Central de la República Argentina" (CNACAF, Sala II, 29/04/2008), *"La responsabilidad en la materia sub examine no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular (...) pues el interés público se ve afectado aun por el perjuicio potencial que aquel pudiere ocasionar (conf. Sala II, in re 'Banco Patagónico S.A.' del 17/10/1994 y esta sala, in re 'Banco Regional del Norte Argentino S.A.', del 6/4/1993) (...) resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes (conf. Sala 3°, in re 'Pérez Álvarez, Mario A.' del 4/7/1986) (...) a los efectos de la aplicación de sanciones, la falta de un efectivo daño a los intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar (conf. Sala 3°, in re 'Compañía Franco Suiza de Inversiones S.A.', del 7/10/1982)"*.

Que, asimismo, en similar sentido se ha expresado la CNACAF, sala II, el 18 de agosto de 2018 en autos caratulados "Sergio Villella S.A. y Otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25246- Dto. 290/07 art. 25".

Que, cabe recordar que conforme se desprende del análisis del cargo, la infracción imputada en el marco del presente sumario ha generado una vulnerabilidad al sistema de PLA/FT del Sujeto Obligado.

Que, al respecto, la jurisprudencia sostuvo también que *"...debe señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose –para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. c/ D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C.I.' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati S.A.– Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros). Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa a instruir el procedimiento*

sumarial" (CNCAF, Sala II, 14/08/2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Artículo 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley N.° 25.246 – Dto. 290/07 Artículo 25").

Que, en el mismo orden de ideas se ha afirmado que *"...el 'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan"* (CNACAF, Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246- Dto 290/07 Art 25" del 21/05/2015).

Que, se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutela efectiva prescripta por los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Que, en la tramitación de las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo consagrado receptado por el inciso 8 del artículo 14, de la Ley N.° 25.246, y con el inciso f) del artículo 1°, de la Ley N.° 19.549, que establece en los procedimientos administrativos -entre ellos los sancionadores- la posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada.

Que, las conclusiones a las que ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador se encuadran en el ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016 y sus respectivas modificatorias).

Que, los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias establecen que la persona humana que incumpla alguna de las obligaciones ante esta UIF será pasible de sanción de multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000) a PESOS CIEN MIL ($100.000), en los casos en que no se pueda establecer el valor real de los bienes.

Que la finalidad esencial de las sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de conductas reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen correspondiente, conforme lo establece el inciso d) del artículo 7° de la Ley N.° 19.549 y sus modificatorias.

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete, conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y 834 del 6 de diciembre de

137

2021.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar la responsabilidad del escribano público Eugenio GÓMEZ BERTI (CUIT N.° 20-28238800-7), conforme a lo dispuesto por el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N.° 25.246 y al inciso g) del artículo 2° de la Resolución UIF N.° 21/2011, por haberse acreditado el cargo de falta de registración ante la UIF en tiempo oportuno en infracción al artículo 3° de la Resolución UIF N.° 50/2011 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Imponer, en consecuencia a lo dispuesto en el artículo 1° del presente, una multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000), al Escribano allí citado, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de esta Resolución y a lo establecido en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese e intímese al sumariado a hacer efectivo el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar), bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber al sumariado que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de TREINTA (30) días por ante la justicia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N.° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N.° 19.549.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 31 y 35 Resolución UIF N.° 111/2012, con copia certificada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

Digitally signed by OTERO Juan Carlos
Date: 2023.05.09 15:49:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

JUAN CARLOS OTERO
Presidente
Unidad de Información Financiera

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.05.09 15:49:52 -03:00